951

ORDEN de 19 de noviembre de 1984 por la que se dispone la ejecución de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada con fecha 15 de junio de 1984, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en 11 de mayo de 1984 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, recaída en el expediente de compatibilidad de don Valentín Guitart Aparicio.

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por el señor Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, con fecha 11 de mayo de 1984, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Personal, apareciendo como parte apelada don Valentín Guitart Aparicio, se ha dictado sentencia por la Sala Tercera del Tribunal Supremo con fecha 15 de junio de 1984, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación promovido por la representación del Estado, debemos revocar y revocamos la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Zaragoza de 11 de mayo de 1984, y desestimando el recurso contencioso-administrativo promovido por la representación de don Valentín Guitart Aparicio, debemos declarar y declaramos que en la Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda de 18 de enero de 1984 no se vulnera el artículo 14 de la Constitución; con expresa imposición de costas al recurrente al ser desestimadas sus pretensiones.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 19 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

952

ORDEN de 28 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, dictada con fecha 9 de julio de 1984, en el recurso contencioso-administrativo número 262/84, interpuesto contra resolución de este Departamento por don José Luis Montes Meana.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 262/84, promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, por don José Luis Montes Meana, Abogado del Estado sustituto, contra resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de 30 de enero de 1984, recaída en expediente de compatibilidad número 361/83, por la que se deniega al recurrente el ejercicio privado de la Abogacía con su actividad principal de Abogado del Estado, por considerar este cargo incompatible con aquél, se ha dictado sentencia con fecha 9 de julio de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debíamos desestimar las pretensiones deducidas por don José Luis de Montes Meana contra el acuerdo de 30 de enero de 1983 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda, que le denegó la compatibilidad de su actual puesto de trabajo con el ejercicio de la Abogacía, imponiéndole al actor las costas de este recurso y se alza la suspensión del acto referido.»

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

953

ORDEN de 28 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Sevilla, dictada con fecha 4 de julio de 1984, en el recurso contencioso-administrativo número 227/84, interpuesto contra resolución de este Departamento por don Juan Antonio Garrido Fera.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 227/84, promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla por don Juan

Antonio Garrido Fera, Letrado sustituto del Cuerpo de Abogados del Estado, número de Registro de Personal C03HA354, contra resolución de este Ministerio de 12 de enero de 1984, recaída en expediente de compatibilidad número 391/83, por la que se deniega al recurrente el ejercicio privado de la Abogacía con su actividad principal de Abogado del Estado, por considerar este cargo incompatible con aquél, se ha dictado sentencia con fecha 4 de julio de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Antonio Garrido Fera, al amparo de la Ley 62/1978, de 28 de diciembre, contra el acuerdo de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 de enero de 1984, que denegó al mismo la compatibilidad entre el ejercicio libre de su profesión de Abogado y la actividad de Abogado del Estado sustituto, contratado, el que debemos confirmar y confirmamos al no infringir los derechos fundamentales invocados, y todo ello con expresa imposición de costas al actor; se alza la suspensión del acto impugnado.»

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1958.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 28 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

954

ORDEN de 29 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 5 de noviembre de 1983, en el recurso contencioso-administrativo número 21.093, en grado de apelación, contra sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 1 de diciembre de 1980, siendo parte apelada don Francisco Gil Cuartero.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.093, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como consecuencia de la apelación interpuesta por la Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 1 de diciembre de 1980, siendo parte apelada, don Francisco Gil Cuartero, se ha dictado sentencia, con fecha 5 de noviembre de 1983, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de apelación, interpuesto por don Francisco Gil Cuartero contra la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 1 de diciembre de 1980, la cual confirmamos íntegramente, todo ello sin la expresa condena en costas de esta apelación.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 27 de diciembre de 1958.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 28 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario

955

ORDEN de 29 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 de junio de 1984, en el recurso contencioso-administrativo número 22.265, en grado de apelación contra sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 2 de febrero de 1982, siendo parte apelada la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 22.265 ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como consecuencia de la apelación interpuesta por la Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 2 de febrero de 1982, siendo parte apelada la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, se ha dictado sentencia, con fecha 8 de junio de 1984, cuya parte dispositiva, es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador señor Granados Well, en la representación que ostenta, confirmamos por su adecuación al ordenamiento jurídico, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 2 de febrero de 1982, dictada en su recurso número 22.265. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 29 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

956

ORDEN de 29 de noviembre de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 15 de junio de 1984, en el recurso contencioso-administrativo número 21.728, interpuesto contra resolución de este Ministerio, de fecha 22 de octubre de 1980, por el «Banco del País, S. A.».

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.728 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Nacional, entre el «Banco del País, Sociedad Anónima», como demandante, y la Administración General del Estado, como demandada, contra resolución de este Ministerio, de 22 de octubre de 1980, sobre su creación, se ha dictado, con fecha 15 de junio de 1984, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando las causas de inadmisibilidad invocadas por la Abogacía del Estado, así como el actual recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Calleja García, en nombre y representación de la Entidad demandante «Banco del País, S. A.» frente a la demandada, Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía; contra la desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de Economía y Comercio, del recurso pletestativo de reposición interpuesto, contra la resolución de dicho Ministerio, de 22 de octubre de 1980, a las que la demanda se contrae; debemos declarar y declaramos ser conformes a derecho, y por consiguiente, mantenemos los referidos actos administrativos, al presente combatidos; todo ello, sin hacer una expresa declaración de condena en costas, respecto de las derivadas de este proceso jurisdiccional.»

Contra esta sentencia se ha interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en el artículo 8.º número 3, del Real Decreto-ley 1/1977, de 4 de enero, que ha sido admitido a un solo efecto, por lo que procede el cumplimiento de la mencionada sentencia, sin perjuicio de los efectos revocatorios, que, en su caso, puedan derivarse de la estimación de la apelación interpuesta.

En su virtud, este Ministerio, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, si bien condicionado en cuanto a sus efectos definitivos al resultado de la apelación interpuesta, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento por analogía, de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de fecha, 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 29 de noviembre de 1984.—P. D., el Subsecretario, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

957

ORDEN de 4 de diciembre de 1984 por la que se autoriza a la firma «Laboratorios Radio GH, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de poliamida 6 y la exportación de tapacubos para neumáticos de automóvil.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «Laboratorios Radio GH, S. A.», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de poliamida 6 y la exportación de tapacubos para neumáticos de automóvil,

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma «Laboratorios Radio GH, S. A.», con domicilio en Vereda Real, sin número, San Antonio de Benagéver (Valencia), y NIF A-46-021705.

Segundo.—La mercancía de importación será:

1. Poliamida 6, en granza, al 100 por 100, P. E. 39.01 57.2, de los siguientes colores:

- 1.1 Natural durethan B30S.
- 1.2 Gris durethan B30S-7035/0.

Tercero.—Los productos de exportación serán:

I. Tapacubos para neumáticos de automóvil, P. E. 87.08.41.

Cuarto.—A efectos contables se establece lo siguiente:

a) Por cada 100 kilogramos de poliamida 6 realmente contenidos en los tapacubos que se exporten se podrán importar con franquicia arancelaria, o se datarán en cuenta de admisión temporal, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, 103,09 kilogramos de la citada mercancía.

b) Se consideran pérdidas el 3 por 100 en concepto exclusivo de mermas.

c) El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal así como calidades, tipos (acabados, colores, especificaciones particulares, formas de presentación), dimensiones y demás características que las identifiquen y distinguan de otras similares y que en cualquier caso deberán coincidir respectivamente con las mercancías previamente importadas o que en su compensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Quinto.—Se otorga esta autorización hasta el 31 de octubre de 1985; a partir de la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», debiendo el interesado, en su caso, solicitar la prórroga con tres meses de antelación a su caducidad y adjuntando la documentación exigida por la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

Sexto.—Los países de origen de la mercancía a importar serán todos aquellos con los que España mantiene relaciones comerciales normales. Los países de destino de las exportaciones serán aquellos con los que España mantiene, asimismo, relaciones comerciales normales o su moneda de pago sea convertible, pudiendo la Dirección General de Exportación, si lo estima oportuno, autorizar exportaciones a los demás países.

Las exportaciones realizadas a partes del territorio nacional situadas fuera del área aduanera también se beneficiarán del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo en análogas condiciones que las destinadas al extranjero.

Séptimo.—El plazo para la transformación y exportación en el sistema de admisión temporal no podrá ser superior a dos años, si bien para optar por primera vez a este sistema habrán de cumplirse los requisitos establecidos en el punto 2.4 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 y en el punto 6.º de la Orden del Ministerio de Comercio de 24 de febrero de 1978.

En el sistema de reposición con franquicia arancelaria el plazo para solicitar las importaciones será de un año a partir de la fecha de las exportaciones respectivas, según lo establecido en el apartado 3.6 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975.

Las cantidades de mercancías a importar con franquicia arancelaria en el sistema de reposición, a que tienen derecho las exportaciones realizadas, podrán ser acumuladas, en todo o en parte, sin más limitación que el cumplimiento del plazo para solicitarlas.

En el sistema de devolución de derechos, el plazo dentro del cual ha de realizarse la transformación o incorporación y exportación de las mercancías será de seis meses.

Octavo.—La opción del sistema a elegir se hará en el momento de la presentación de la correspondiente declaración o licencia de importación, en la admisión temporal. Y en el momento de solicitar la correspondiente licencia de exportación, en los otros dos sistemas. En todo caso, deberá indicarse en las correspondientes casillas, tanto de la declaración o licencia de importación como de la licencia de exportación, que el titular se acoge al régimen de tráfico de perfeccionamiento activo y el sistema elegido, mencionando la disposición por la que se le otorgó el mismo.

Noveno.—Las mercancías importadas en régimen de tráfico de perfeccionamiento activo, así como los productos terminados exportables, quedarán sometidos al régimen fiscal de comprobación.

Décimo.—En el sistema de reposición con franquicia arancelaria y de devolución de derechos, las exportaciones que se hayan efectuado desde el 31 de octubre de 1983 hasta la aludida fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», podrán acogerse también a los beneficios correspondientes, siempre que se hayan hecho constar en la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de estar en trámite su resolución.

Para estas exportaciones, los plazos señalados en el artículo anterior comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Undécimo.—Esta autorización se regirá en todo aquello relativo a tráfico de perfeccionamiento y que no esté contemplado en la presente Orden, por la normativa que se deriva de las siguientes disposiciones:

Decreto 1492-1975 («Boletín Oficial del Estado» número 165).

Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» número 282).